

La clientelización de la etnicidad: hegemonía partidaria y subjetividades políticas indígenas

Gastón GORDILLO

University of British Columbia, Canadá
gordillo@interchange.ubc.ca

Recibido: 17 de octubre de 2008

Aceptado: 21 de abril de 2009

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar cómo las demandas y subjetividades políticas de grupos indígenas de la provincia argentina de Formosa están entrelazadas con aparatos político-partidarios. Examinó en particular cómo la dimensión étnica de las movilizaciones de grupos tobas, wichí y pilagá está estrechamente configurada por las redes clientelares y pugnas internas tejidas entre diversas facciones del partido dominante en Formosa, el Partido Justicialista. Antes que implicar la supeditación de identidades étnicas a factores de poder externos a ellas, estos procesos sacan a la luz la manera en que la etnicidad se constituye y reconstituye por relaciones de dominación política. En este sentido, analizo cómo lo que podría denominarse la «clientelización de la etnicidad» produce tanto espacios de control como espacios de resistencia y acomodamiento, desde los cuales actores aborígenes canalizan sus demandas dentro del faccionalismo del partido gobernante.

Palabras claves: Etnicidad, hegemonía, clientelismo, Peronismo, Partido Justicialista, Argentina, Formosa, Gran Chaco.

The Clientelization of Ethnicity: Party Hegemony and Indigenous Political Subjectivities

ABSTRACT

In this article, I examine how the demands and political subjectivities of indigenous people in the Argentinean province of Formosa are intertwined with, and constituted by, party politics. In particular, I analyze how the ethnic dimensions of the mobilizations and political demands by Toba, Pilagá, and Wichí groups are closely configured by the webs of patron-client relations woven by factions of the provincial ruling party, the Partido Justicialista. Rather than implying the subordination of ethnic identities to power relations external to them, this process brings to light the ways in which ethnicity is constituted and reshaped by relations of political domination. Further, I examine how what could be called the «clientelization of ethnicity» produces both political control and practices of resistance and accommodation, from which indigenous people push for their demands from within the factionalism of the ruling party

Key words: Ethnicity, hegemony, clientelism, Peronism, Partido Justicialista, Argentina, Formosa, Gran Chaco.

Sumario: 1 Introducción. 2. «Oficialistas» y «opositores» en el Barrio Obrero. 3. Clientelismo, aboriginalidad y estrategias electorales. 4. A modo de conclusión: etnicidades, hegemonías y contra-hegemonías. 5. Referencias bibliográficas.

1. Introducción

En tres oportunidades entre 2003 y 2007, el programa televisivo «Telenoche Investiga» del Canal 13 de Buenos Aires emitió el resultado de investigaciones periodísticas fuertemente críticas del partido dominante en la provincia de Formosa, el Partido Justicialista (PJ), que es también el partido gobernante a nivel nacional en Argentina y heredero del legado de Juan Domingo Perón en el país¹. Estos programas denunciaron

¹ Uno de los exponentes más paradigmáticos del populismo y nacionalismo de mediados del siglo XX en

las formas de intimidación y manipulación utilizadas por «punteros» (dirigentes de base) y candidatos del Justicialismo formoseño para garantizar el voto de personas aborígenes. Entre las prácticas aludidas, se destacaban el secuestro temporal de los documentos de identidad necesarios para votar (que eran devueltos momentos antes de la votación junto con la boleta del candidato a apoyar), la «compra» de votos a cambio de dinero y mercaderías y el encierro de personas en galpones antes de cada elección (para asegurar su traslado a las mesas electorales el día de la votación).

Si bien algunas de estas acciones son comunes en muchos otros lugares de Argentina, el impacto público de dichos programas estuvo en buena medida basado en el hecho de que involucraban a quienes desde Buenos Aires se suelen ver como los sujetos más marginales y vulnerables del país: los grupos aborígenes². Esta percepción se acentuaba por el hecho de que la mayoría del público de clase media de Buenos Aires se ve a sí mismo como de ascendencia europea e imagina a Formosa, ubicada en el norte del país, en la región del Gran Chaco, como una geografía atrasada, pobre y primitiva.

La difusión de estas denuncias fue sin duda valiosa y ha contribuido a hacer conocer aspectos de la realidad política de una provincia que rara vez llega a los titulares de los medios de comunicación a nivel nacional en Argentina. No obstante, lo que me interesa examinar aquí es el tipo de representaciones sobre lo indígena que aparecen condensadas en programas como éste, para utilizarlo como punto de partida para hacer un análisis más amplio de las subjetividades políticas aborígenes en Formosa: esto es, de las identidades, lealtades, significados y valores que gente indígena crea y moviliza en sus reclamaciones políticas. Más allá de la cobertura de una situación de explotación y manipulación política, lo que predominó en los programas de «Telenoche Investigá» es la visión de los aborígenes como personas relativamente indefensas y sin poder, víctimas pasivas de fuerzas y relaciones que serían externas a ellas. La noción de externalidad es particularmente importante en estos imaginarios. Los programas televisivos aludidos, en este sentido, presentaron al aparato político del PJ como una estructura que se impone, desde una supuesta distancia tanto espacial como social y cultural, sobre personas indígenas ajenas a ella. Y estas últimas fueron presentadas como un bloque homogéneo de individuos igualados en su compartida opresión. Esta visión de separación y homogenización, no obstante, responde a una mirada superficial y, en última instancia problemática, que reproduce viejos discursos que ven a los aborígenes como supervivencias de un pasado arcaico, y que estarían desfasados de actuales prácticas e identidades políticas.

En este trabajo, mi objetivo es hacer una reflexión crítica sobre estas representaciones y sobre todo examinar algunas de las prácticas por las cuales los grupos indígenas son actores que son copartícipes tanto en la producción como en el

América Latina, Juan Domingo Perón fue presidente de la Argentina entre 1946-1955 y 1973-1974, cuando falleció mientras ocupaba el cargo.

² En varias partes de Argentina y sobre todo en Formosa, «aborigen» se ha convertido en el término principal para referirse a personas autoidentificadas como indígenas. Por ello, aquí utilizo los conceptos «aborigen» e «indígena» como sinónimos. Más adelante, no obstante, analizo los significados más específicos asociados al término «aborigen» en Formosa como marcador tanto de etnicidad como de clase y anclado espacialmente en el Gran Chaco.

cuestionamiento de las redes políticas hoy en día hegemónicas en Formosa. En particular, me centraré en ejemplos del oeste de la provincia (la región con la que estoy más familiarizado) pero que son representativos de otros casos dentro de la geografía provincial. Al enfatizar la iniciativa política de estos grupos no pretendo relativizar ni las relaciones de poder que colocan a la mayoría de la población aborígena en un lugar de subordinación política ni a las prácticas denunciadas en «Telenoche Investiga». Por el contrario, mi objetivo es analizar cómo estas relaciones de poder son constitutivas de las prácticas y subjetividades políticas indígenas y mostrar, a su vez, cómo los aborígenes son actores que participan activamente en la producción, reproducción y crítica de redes clientelares: i.e. relaciones de dependencia basadas en el intercambio de votos por favores, bienes y recursos (ver Auyero 2001). Ello hace que acciones como las presentadas en «Telenoche Investiga», como la retención de documentos de identidad o el intercambio de mercaderías por votos, sean realizadas no sólo por políticos no-indígenas sino también por punteros y candidatos aborígenes plenamente alineados en distintas facciones del PJ. En otras palabras, la dinámica del clientelismo político en Formosa está muy lejos de enfrentar, por un lado, a «los aborígenes» y, por el otro, a «los criollos» (o «los blancos») y al «Estado». Por el contrario, las relaciones clientelares en la provincia son tan fuertes y están tan diseminadas que en algunos casos la oposición «aborígenes» vs. «criollos» queda desdibujada frente a otras divisiones que se vuelven preponderantes en época de elecciones, tales como «oficialista» y «opositor» con respecto a la línea dominante del actual gobernador Gildo Insfrán (como veremos más adelante).

Esta dinámica y en general la importancia del clientelismo político entre grupos indígenas ciertamente no son exclusivas de Formosa y son comunes en otros lugares de Argentina y América Latina. Pero la mayoría de los análisis antropológicos de las prácticas políticas indígenas en el continente ha tendido a centrarse en organizaciones o movimientos indígenas que despliegan, fundamentalmente, una agenda definida según criterios étnicos (Turner 1991; Conklin 1997; Ramos 1998; Warren 1998; Warren y Jackson 2002; Sawyer 2004). En este artículo, mi objetivo es examinar un aspecto relativamente poco estudiado de las experiencias políticas indígenas en América Latina: la inmersión de actores indígenas en partidos políticos nacionales, un fenómeno que es significativo en países con fuertes estructuras partidarias como Argentina o México. En particular, considero que hay algo específico sobre el caso de Formosa en cuanto a lo que llamaría «la clientelización de la etnicidad»: el relativo éxito del Justicialismo en canalizar y aglutinar desde el retorno de la democracia en Argentina en 1983 la mayor parte de las energías políticas indígenas en la provincia. Por «éxito» no me refiero a la neutralización de formas de protesta o disenso, sino a la capacidad del partido dominante para definir los campos dentro de los cuales se desarrollan estas formas de acomodamiento y resistencia. Ello requiere especificar mi uso del término «hegemonía».

Se ha escrito mucho sobre la falta de una definición precisa de este concepto por parte de Antonio Gramsci (1971 [1929-35]), el autor que más ha contribuido a popularizarlo. Pero lo que está claro es que para Gramsci «hegemonía» no implicaba simplemente consenso; por el contrario, era algo por lo cual las clases subalternas debían *luchar* con el objeto de crear una nueva hegemonía que reemplazase a la hegemonía

de los sectores dominantes. Un número creciente de autores ha retomado esta línea argumental, centrada en el dinamismo de toda práctica política, para señalar que la hegemonía nunca neutraliza formas de crítica y disenso (Comaroff y Comaroff 1991, 1997; Williams 1977). Una de las contribuciones más originales al respecto es la de William Roseberry (1994), quien ha sostenido –profundizando a Gramsci– que el concepto de hegemonía no debe ser utilizado para analizar el «consenso» sino por el contrario las luchas políticas, esto es, cómo los símbolos, valores y prácticas que actores subalternos usan para negociar y eventualmente resistir su opresión son moldeados por el propio proceso de dominación.

En el caso de Formosa, esto implica ver las prácticas de resistencia y acomodamiento de grupos indígenas frente al partido dominante no como acciones «externas» a relaciones de poder sino como parte constitutiva de ellas (ver Moore 2005). Algo destacable de esta provincia es que estas relaciones hegemónicas han impedido durante mucho tiempo la conformación de organizaciones indígenas que se enfrentasen abiertamente al estatus quo provincial. En otras provincias argentinas, sí existen o han existido agrupaciones de este tipo. Más allá de las importantes diferencias que existen entre ellas, organizaciones como Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) en Salta, el Consejo Asesor Indígena (CAI) en Río Negro, o la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en Jujuy, por ejemplo, fueron originalmente creadas desde el exterior de aparatos partidarios, en algunos casos por medio de lazos con ONGs u organizaciones religiosas como la Iglesia Anglicana (en el caso de Lhaka Honhat) o ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborígen de la Iglesia Católica, en el caso de la APG). Esta relativa autonomía partidaria les permitió tomar posición como fuerzas de relativa oposición a los respectivos aparatos políticos provinciales, a pesar de que en la actualidad varios de sus dirigentes no están libres de influencias clientelares-partidarias y de que, a su vez, las ONGs mencionadas condicionan sus prácticas y estrategias. En Formosa, más allá de algunas instancias alternativas recientes que menciono en las conclusiones, no han surgido hasta el momento organizaciones similares; no hay una organización interétnica comparable a Lhaka Honhat (que aglutina a grupos wichí, chorote, tapiete y tobas, si bien con una fuerte preponderancia wichí) o una agrupación que exprese el tipo de radicalismo político de los dirigentes y militantes mapuche del CAI. No obstante, y retomando mi previo hilo argumental sobre la hegemonía, ello no significa que en Formosa las luchas indígenas tengan menos fuerza o poder, sino que éstas se suelen canalizar a través de las pugnas que existen en el interior del PJ. Ello tampoco implica que en Formosa no existan organizaciones locales indígenas creadas por fuera del aparato del Justicialismo, como lo muestra la existencia de numerosas asociaciones civiles que han recibido títulos de tierras. Sin embargo, estas asociaciones suelen estar centradas en torno a problemáticas de corte local y a la hora de plantear demandas más amplias, sus dirigentes suelen actuar políticamente en el campo del faccionalismo del Justicialismo formoseño.

El análisis y comprensión de este fenómeno requiere retrotraernos a la historia reciente de la provincia. Ubicada sobre la frontera noroeste de la Argentina con Paraguay a lo largo de los ríos Paraguay y Pilcomayo, Formosa fue inicialmente un territorio federal que, aunque formalmente creado en 1884, estuvo hasta principios del siglo XX bajo el control de grupos indígenas políticamente autónomos, sobre todo tobas, pilagá

y wichí. Estos y otros grupos de la llanura chaqueña habían resistido el avance estatal durante siglos. Pero esta resistencia fue vencida por las campañas militares realizadas por el ejército argentino en 1884 y 1911, que abrieron la región a la colonización de pobladores no-indígenas y a inversiones capitalistas y estatales. En el momento en que Formosa adquirió estatus de provincia, en 1955, los discursos oficiales resaltaban una identidad provincial basada en la idea de una sociedad fronteriza relativamente reciente, producto de las campañas militares civilizadoras contra «los indios salvajes del Chaco» y forjada en buena medida por campesinos y colonos agrícola-ganaderos provenientes de Paraguay y el litoral (en el este), criollos ganaderos provenientes de Salta (en el oeste) e inmigrantes europeos. Desde un principio, no obstante, estos actores debieron interactuar en forma cotidiana con la numerosa población indígena que había sido despojada total o parcialmente de sus tierras y que siguió sufriendo formas de violencia estatal hasta mediados del siglo XX. Durante varias décadas, estos grupos carecieron de derechos de ciudadanía y por ende de derechos políticos y en su mayor parte fueron excluidos de la vida política formoseña (ver Gordillo 2006, capítulo 9), en un contexto en el que las narrativas civilizadoras dominaban los discursos públicos provinciales. El auge de la militancia de izquierdas en la década de 1960 y principios de la de 1970, comenzó a socavar este modelo, y para cuando la dictadura militar de 1976-1983 llegó a su fin, los grupos indígenas formoseños comenzaron a participar en las disputas políticas de la provincia en forma creciente y masiva.

Montados en su relativa visibilidad y sobre todo en su peso demográfico-electoral, con el retorno democrático de fines de 1983, diversos grupos indígenas de la provincia organizaron, con el apoyo de varias ONGs, una importante movilización demandando la propiedad de las tierras fiscales por ellos ocupadas. Debido al peso negociador que les daban su número en los padrones electorales y al populismo de corte indigenista del gobierno justicialista de ese entonces, la movilización logró que se realizara una masiva distribución de títulos colectivos de tierras en buena parte de la provincia. La entrega de títulos por parte de la administración de Floro Bogado, el actual vice-gobernador de Formosa, desactivó un importante foco de conflicto y tuvo un enorme impacto en la consolidación de la hegemonía justicialista entre buena parte de la población aborígena. Hoy en día, mucha gente toba, wichí o pilagá explica su apoyo a las distintas facciones del PJ en base a frases como «el peronismo nos dio el título de las tierras»³. Y ello desarticuló el factor que en Salta llevó al surgimiento de Lhaka Honhat en 1992, que fue la demanda de la tierra de los lotes fiscales 55 y 14 junto al río Pilcomayo, aún insatisfecha (Carrasco y Briones 1996; Gordillo y Leguizamón 2002).

Como parte de este proceso político, sostenido en parte por la movilización masiva del voto aborígena, Formosa ha estado gobernada en forma ininterrumpida desde 1983 por administraciones justicialistas, en un proceso en el que la fuerza de los partidos de la oposición ha sido gradualmente reducida a una mínima expresión. El poder hegemónico del PJ en Formosa se expresa, por ejemplo, en el hecho de que en las elecciones

³ Además, muchos aborígenes recuerdan que fue sobre todo con los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón (1946-1955) que ellos fueron reconocidos como ciudadanos y recibieron los documentos de identidad que acreditaban dicho estatus. No obstante, en muchas partes de Formosa, recién a finales de la década de 1960 se hicieron campañas de documentación más masivas en comunidades aborígenes (ver Gordillo 2006, capítulo 7).

de 2003 y 2007 Gildo Insfrán fue reelegido gobernador, en ambos casos, con más del 70 % de los votos. En los departamentos del oeste, donde el peso electoral indígena es el más alto de la provincia, los porcentajes obtenidos por la fórmula Insfrán-Bogado en 2007 fueron particularmente abrumadores: 91,75% (Matacos), 88,75% (Ramón Lista) y 87,75% (Bermejo)⁴. Esta contundencia electoral es el resultado de amplias redes clientelares que son movilizadas de manera particularmente efectiva en períodos electorales, y que incluyen prácticas como las señaladas en «Telenoche Investiga» y que involucran tanto a la población aborigen como criolla. No obstante, las relaciones tejidas por el PJ en las comunidades aborígenes están sometidas a permanentes presiones y deben ser reproducidas a través de múltiples acciones y negociaciones, que incluyen un complejo entrecruzamiento de actores indígenas y no-indígenas.

En este artículo, ilustraré cómo este fenómeno afecta y a su vez moviliza subjetividades políticas aborígenes con dos ejemplos de mi experiencia de trabajo de campo en el oeste de Formosa. El primero se centra en la dinámica de una asamblea realizada en 2003 para elegir las eventuales autoridades del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), el organismo indigenista provincial. El segundo ejemplo envuelve la dinámica y disputas político-electorales que se dan en el interior de comunidades tobas. En la última sección del trabajo, analizaré cómo, a pesar de la fuerza hegemónica del Justicialismo, la manipulación de las redes clientelares por parte de actores aborígenes les ha permitido lograr importantes conquistas y cómo a su vez algunos grupos han abierto espacios políticos alternativos a los del clientelismo. El caso de Formosa, en este sentido, sirve para problematizar y complejizar la difundida visión que asume que los grupos indígenas actúan políticamente, sobre todo, a través de una etnicidad imaginada como opuesta al Estado y a la política partidaria antes que entrelazada con ellos.

2. «Oficialistas» y «opositores» en el Barrio Obrero

En junio de 2003, tuvo lugar en Ingeniero Juárez (el pueblo más importante del oeste provincial) una «asamblea autoconvocada» de representantes de más de 60 comunidades indígenas de Formosa, a la que asistí junto con delegados tobas del oeste de la provincia. Reunidos en un descampado en el Barrio Obrero (uno de los principales barrios wichí del pueblo), el objetivo de las más de cien personas congregadas era elegir un candidato a presidente del ICA. El gobierno estaba a punto de reformar la Constitución Provincial, y como parte de las promesas hechas a las comunidades a cambio del apoyo a la reforma, el Gobernador Insfrán se había comprometido verbalmente a considerar el reemplazo del presidente no-indígena del ICA por un dirigente aborigen. Hasta ese momento, el ICA sólo incluía a dirigentes aborígenes bajo la figura mayormente decorativa de «directores», uno por cada étnia de la provincia (toba, pilagá y wichí), que eran elegidos por sus respectivas comunidades cada dos años pero que no pasaban de cumplir roles burocráticos sin mayor poder de decisión. Por ello, el que la presidencia del ICA quedara en manos de un dirigente aborigen era parte de una antigua demanda en la provincia.

⁴ <http://www.formosa.gov.ar/elecciones2007/resultados/index.php>

La posibilidad de elegir por fin a un «paisano» al frente del ICA generó enormes expectativas en las comunidades aborígenes pero también, inevitablemente, inmediatas pugnas de poder por ver quién accedería a dicha posición. Y ello se expresó claramente en la asamblea de Ingeniero Juárez. Organizado mayormente por dirigentes wichí de dicha localidad, el encuentro concentró a numerosos delegados del oeste de la provincia —en su mayoría wichí de la zona de Ingeniero Juárez, Pozo de Maza y del río Bermejo pero también tobas de la zona de La Rinconada— un dirigente pilagá y un puñado de delegados tobas del este provincial. Y la dinámica del encuentro condensó de manera clara las diversas formas en que se despliegan y fusionan identidades étnicas y político-partidarias.

Sentados en un gran círculo formado por decenas de sillas, los primeros dirigentes en tomar la palabra resaltaron la identidad común de todos los presentes como «aborígenes» unidos para enfrentar su exclusión de la estructura de poder del ICA. Como se trataba de una asamblea autoconvocada sin apoyo financiero o logístico del gobierno, acto seguido algunos delegados mencionaron la ausencia de representantes de las comunidades que no pudieron asistir por falta de recursos, y sugirieron que cualquier votación fuera postergada para otro encuentro más grande, en aras de preservar «la unidad de los aborígenes» de toda la provincia. Esta moción, sin embargo, fue rechazada por la mayoría de los presentes, con el argumento de que sería muy difícil congregarse a delegados de toda la provincia y que aquellos que estaban presentes habían incurrido en considerables gastos para asistir. Tras largos debates, se decidió que la asamblea debía elegir ese mismo día al eventual presidente del ICA. Pero cuando se pasó a debatir cómo elegir a los candidatos, las declamaciones articuladas previamente en torno a una aboriginalidad compartida dieron paso a otro tipo de identificaciones políticas.

En primer lugar, por detrás de la ronda de sillas, diversos núcleos de dirigentes improvisaron reuniones acaloradas a partir de las cuales surgieron los dos candidatos que competirían por el puesto en cuestión: un dirigente wichí de Ingeniero Juárez y un dirigente toba de la ciudad de Formosa. El acuerdo fue que sólo delegados certificados por sus comunidades podían votar, y que lo harían públicamente dejando una marca en un pizarrón junto al nombre del candidato elegido. Cuando los delegados de las diversas comunidades pasaron al frente, uno cada vez, a expresar su voto, estuvo claro que los tobas del oeste y del este apoyaron en forma unánime a su paisano *gom* (toba) y que la mayoría (pero no la totalidad) de los delegados wichí votó por el candidato wichí. Este último terminó ganando la votación por un margen relativamente estrecho. Superficialmente, parecía que el principal eje de disputa había sido exclusivamente étnico, definido en la oposición entre «tobas» y «wichí».

Sin embargo, al final de la asamblea esta dinámica étnico-política se alteró considerablemente. Apenas se declaró ganador al candidato wichí, el clima del encuentro se volvió tenso y emergió con claridad que faccionalismos de corte partidario habían sido un componente importante de la votación. En vez de dar discursos conciliadores sobre «la unidad de los aborígenes» (como yo tal vez ingenuamente esperaba), varios de los delegados del bando perdedor empezaron a cuestionar el resultado, argumentando que la votación era inválida porque los wichí de El Potrillo (la principal población del extremo noroeste de la provincia), los pilagá y los tobas del este provincial no estaban lo suficientemente representados. Como hemos visto, ello había sido men-

cionado como un problema al comienzo de la asamblea, pero los principales dirigentes presentes (incluidos los del bando ahora perdedor) decidieron realizar la votación de todos modos al calcular que podían ganarla. Mientras el encuentro se estaba disolviendo y grupos reducidos de delegados discutían entre sí las implicaciones de la votación, el candidato perdedor les dijo a sus seguidores, visiblemente frustrado, que hablaría personalmente con «Gildo» (el Gobernador Gildo Insfrán) para que se desconociera la validez de la asamblea (que él mismo había legitimado con su presencia). Con una sonrisa irónica, resaltó varias veces que «Gildo» nunca reconocería a aquel dirigente wichí como presidente del ICA. El motivo era que aquél era un peronista «opositor» y que por ende no era «de confianza» para el gobernador.

¿Qué significa esto? En primer lugar, estas prácticas muestran que lo que en un principio parecía ser una disputa exclusivamente étnica entre «tobas» y «wichí» por el posible control de la presidencia del ICA escondía divisiones y alineamientos más complejos, que eran en buena medida producto de la oposición entre las dos principales facciones del Justicialismo formoseño. El candidato toba respondía directamente al oficialismo del Gobernador Insfrán y el apoyo que logró entre los tobas del oeste era sobre todo producto de un fino trabajo de clientelismo realizado por aquél a lo largo de varios años, antes que de una lealtad étnica primordial. De hecho, los tobas del este y el oeste de la provincia tienen pocos lazos culturales, lingüísticos e históricos en común, y en varias oportunidades dirigentes tobas «del oeste» han reclamado (sin éxito) ser reconocidos en el ICA como un grupo étnico diferente a los tobas «del este». El dirigente wichí ganador de la votación de la asamblea, por su parte, representaba a la oposición dentro del PJ formoseño, contraria entonces a la reforma constitucional de Insfrán y a su intento de introducir la reelección indefinida de cargos electivos. Sin duda, el hecho de que en la asamblea de Barrio Obrero la mayoría de los dirigentes wichí y la totalidad de los tobas votase, respectivamente, por candidatos identificados con su marcador étnico más inmediato era también producto de solidaridades leídas en clave étnica. Pero estos alineamientos estaban a su vez atravesados y condicionados por lealtades partidario-faccionalistas que son fundamentales a la hora de intentar influir en el gobierno provincial.

A los pocos días de realizado el encuentro en Ingeniero Juárez, el peso que estas facciones partidarias habían tenido en él se hizo aún más claro. Al regresar a las comunidades tobas y hablar con la gente sobre la asamblea, muchas personas críticas del oficialismo de Insfrán cuestionaron que sus dirigentes hubieran votado al candidato toba de la ciudad de Formosa y me dijeron que ellos hubieran votado al candidato wichí por su carácter de «opositor». De manera similar, al poco tiempo, llegaron noticias de que dirigentes wichí de El Potrillo, que habían estado sub-representados en la asamblea, se oponían al resultado, por más que el ganador había sido un dirigente wichí. Era claro que para ellos la identificación «wichí» del candidato ganador no era determinante en sus alineamientos políticos. Lo que pesaba en este caso, y lo que guiaba su decisión, era que ellos eran mayormente «oficialistas» y veían con malos ojos que un «opositor» quedara como posible presidente del ICA. A este factor deben sumársele rivalidades localistas entre diversos subgrupos wichí, como los del Bermejo (preponderantes en Ingeniero Juárez) y el Pilcomayo (en El Potrillo). En aquellos días, el consenso en las comunidades tobas era que, de haber asistido a la

asamblea de Ingeniero Juárez, los dirigentes wichí de El Potrillo hubieran apoyado mayoritariamente al candidato toba por su condición de «oficialista». Poco después, el Gobernador Insfrán desconoció la votación de la asamblea por su «falta de representatividad» y el conflicto en torno a la presidencia del ICA quedó sin resolver. El gobierno logró imponer la reforma de la Constitución Provincial y hasta hoy en día el presidente del ICA sigue siendo una persona no-indígena que responde al Poder Ejecutivo provincial.

Lo que me interesa resaltar aquí es cómo identidades de tipo étnico aparecen inexorablemente ligadas a identidades políticas faccionalistas creadas por redes clientelares-partidarias, y cómo marcadores como «wichí» y «toba» no necesariamente implican la lealtad política de miembros del mismo grupo. Estos marcadores étnicos, de hecho, están entrelazados con identidades políticas de otro tipo. En momentos como el creado en la asamblea de 2003, las afiliaciones de corte partidario-faccionalista de hecho se volvieron ineludibles en la producción de lealtades políticas. ¿Pero cómo juega entonces aquí «lo étnico»? ¿Es la variable étnica entonces «secundaria» a otras variables identitarias? Mi respuesta es claramente negativa. Las adscripciones étnicas son de hecho centrales en estas pujas, pero se despliegan de manera que confirman el carácter histórico-político, antes que primordial, de la etnicidad. Y para ilustrar este punto me referiré ahora a mi segundo ejemplo.

3. Clientelismo, aboriginalidad y estrategias electorales

La dinámica política en el seno de las comunidades tobas del oeste de Formosa complica aún más el panorama presentado en el caso anterior, y por ello es necesario retomar la discusión previa sobre la relación entre hegemonía y etnicidad. Y aquí quiero analizar la importancia del marcador «aborigen», el más utilizado en Formosa, y sus diversos significados. Cualquier persona que pase un tiempo en comunidades indígenas en Formosa, y sobre todo en el oeste provincial, notará que mucha gente se refiere más comúnmente a sí misma como «aborigen» antes que como «toba» o «wichí». Obviamente, ello no quiere decir que estos últimos marcadores no sean importantes, sobre todo cuando miembros de estos dos grupos interactúan entre sí. Pero en sus conflictos con los pobladores criollos o con dirigentes del gobierno provincial, el término genérico «aborigen» es usado por la gente toba y wichí con una fuerza que a menudo desplaza a marcadores étnicos más específicos.

Las razones de ello deben rastrearse en la historia de la producción de etnicidades en esta región de Formosa. Antes de la llegada de los criollos y el ejército a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, no existía en la zona una autoidentificación étnica y genérica similar. Por el contrario, el Chaco centro-occidental era entonces un mosaico de grupos con identidades político-culturales y lingüísticas diferenciadas y a menudo en conflicto entre sí, que incluía frecuentes enfrentamientos armados. Cuando desde principios del siglo XX los grupos del oeste formoseño comenzaron a migrar regular y masivamente a los ingenios azucareros de Jujuy y luego Salta, esta situación cambió. Como lo analizara en otros trabajos (Gordillo 2004, 2006), hombres y mujeres wichí, toba y pilagá fueron insertados en una jerarquía laboral fuertemente etnicizada

y que los englobaba, junto con los demás grupos del Chaco (como los chorote, nivaclé y tapiete) bajo un mismo rótulo: «indios» o «aborígenes». Sobre todo a partir de la década de 1930, cuando los cortadores de caña en los ingenios pasaron a ser campesinos de la zona andina argentino-boliviana, los «aborígenes» del Chaco pasaron a formar una masa laboral no-calificada (utilizada para hacer desmontes, plantar caña o cavar zanjas) y sobre-explotada que compartía formas de pago y condiciones laborales similares, que los distinguían claramente del resto de los trabajadores. Al convivir durante décadas en los ingenios bajo condiciones similares, los chorote, wichí, tobas, pilagá y nivaclé desarrollaron una identidad común como «aborígenes» que antes no existía y que al ser producida por la experiencia laboral en los cañaverales adquirió fuertes componentes de clase. Esta experiencia continuó hasta fines de la década de 1960, cuando los ingenios se mecanizaron y dejaron de emplear mano de obra estacional de la región chaqueña. Moldeado por la memoria del ingenio, el término «aborígen» se transformó en un marcador étnico anclado espacialmente en el Chaco pero también en un marcador de clase que la gente wichí, toba y pilagá asocia, casi inexorablemente, a una situación de pobreza (ver Gordillo 2004). A ello debe sumársele la actividad de agencias estatales, ONGs y diversas iglesias que durante décadas interpelaron también a estos grupos en tanto «aborígenes» marcados por una experiencia colectiva de subalternidad.

Esta digresión histórica es importante porque la posición de sujeto «aborígenes» juega un rol preponderante en las disputas clientelares tejidas en el interior de las comunidades tobas del oeste formoseño. En mis primeros trabajos de campo en estas comunidades, a fines de la década de 1980 y principios de la década de 1990, me sorprendía ver cómo a la hora de organizarse frente a las elecciones municipales la gente nunca presentaba un candidato único. Por ser mayoría frente a los wichí y los criollos de la zona que votan en la elección del intendente del poblado de Pozo de Maza, los votantes tobas estaban en condiciones de colocar a uno de los suyos en la intendencia. Sin embargo, en la práctica nunca formaban un frente étnico común y presentaban, por el contrario, varios candidatos enfrentados entre sí y que respondían a diferentes «sublemas» (facciones) justicialistas⁵. Debido a la debilidad regional del principal partido de la oposición (UCR, Unión Cívica Radical), para estos líderes tenía poco sentido político o estratégico participar como candidatos de un partido que no fuera el Justicialista⁶. Los diversos candidatos tobas, ciertamente, tejían sus redes de seguidores más inmediatos en torno a relaciones de parentesco ancladas en sus propias comunidades. Pero por fuera de ellas, las divisiones canalizadas por los sublemas del PJ creaban lealtades políticas diversas y contrapuestas. Como resultado de esta dinámica, hasta ese momento los intendentes habían sido en su mayoría dirigentes criollos

⁵ La llamada «ley de lemas» imperante en Formosa permite que, en cada elección, cada partido («lema») pueda presentar varios candidatos que representan «sublemas» que compiten entre sí por cargos electivos como intendentes, concejales o diputados, aunque formalmente pertenezcan al mismo partido.

⁶ La excepción fueron breves momentos a fines de la década de 1980, cuando un prominente líder toba estuvo durante varios años afiliado a la UCR, y en 1996, cuando con el objeto de protestar por los masivos despidos en la municipalidad, muchos hombres y mujeres tobas renunciaron al PJ y se afiliaron a la UCR. Poco después, sin embargo, la gran mayoría de estas personas terminó realineándose con el Justicialismo debido al poco peso de la UCR en la provincia (ver Gordillo 2002).

o wichí, quienes a su vez habían sido apoyados por un número muy considerable de votantes tobas. En esa época, mi sentido común daba por sentado que su identidad como «tobas» debería predominar casi naturalmente frente a cualquier otra identidad en la producción de lealtades políticas y, por ende, esa fragmentación me perturbaba e intrigaba. Mi actitud inicial fue interpretar este fenómeno como resultado de una suerte de «falsa conciencia» creada por el clientelismo y faccionalismo del PJ; esto es, veía al clientelismo como una fuerza que se imponía a los tobas desde un ámbito exterior a ellos, los fragmentaba y les impedía ver que sus «verdaderos» intereses pasaban por formar un frente étnico en cuanto «tobas». Poco a poco, me fui dando cuenta de que, en realidad, esta interpretación se basaba en una lectura engañosa, superficial y en última instancia paternalista, que pasaba por alto el peso de las experiencias históricas que han constituido, y siguen constituyendo, las subjetividades aborígenes en la región.

Y esto me lleva a mi discusión anterior sobre la aboriginalidad en el oeste de Formosa como una posición de sujeto que es tanto étnica como de clase. En este sentido, las razones que muchos tobas daban para no apoyar a algunos dirigentes de su propio grupo étnico era que éstos se estaban haciendo «ricos» con «la política», y que esa riqueza de alguna forma traicionaba la moralidad pública, las prácticas de reciprocidad y la pobreza que los debería definir como «aborígenes». Por ende, varias personas me decían que si a través de favores clienterales (como la distribución de mercaderías, pensiones, planes sociales o eventualmente un empleo público) obtenían más recursos de un candidato wichí o criollo, no tenían problemas en votarlos a ellos en vez de apoyar a paisanos tobas «ricos» (Gordillo 2002, 2006). La posición de sujeto que pesaba en esos momentos era, por ende, una identidad étnica: pero no una identidad en tanto «tobas» sino en tanto «aborígenes», que al estar asociada a la pobreza tiene componentes de clase y define a líderes indígenas enriquecidos como personas alejadas de su aboriginalidad.

Lo paradójico, entonces, es que esta identidad étnica con elementos de clase hacía que muchos tobas apoyaran a candidatos no-tobas, ya sea wichí o criollos. A ello se le sumaban rivalidades locales entre distintas comunidades y entre dirigentes dentro de una misma comunidad. El conjunto de estas prácticas estaba, a su vez, manipulada por las redes de punteros y facciones del PJ, que hacían que tanto los candidatos tobas como wichí, antes que avanzar una agenda específicamente «toba» o «wichí», se identificaran fundamentalmente como candidatos de «la oposición» o «el oficialismo» dentro del Justicialismo formoseño. Antes que estar cegada o engañada por una «falsa conciencia», la gente tomaba sus decisiones políticas sobre a quién votar en tanto «aborígenes» que, en un contexto de extrema pobreza, trataban de sacar el mayor rédito posible de las redes locales de poder. Como parte de estas prácticas, la retención de documentos de identidad días antes de las elecciones y el intento de los distintos candidatos (tobas, wichí y criollos) de obtener votos a cambio de mercaderías o promesas de pensiones o planes sociales eran moneda corriente. Las manipulaciones, falsas promesas y engaños asociados a estas prácticas hacían que la mayoría de los votantes tuviera una visión particularmente negativa y cínica de «la política» y del clientelismo creado por el aparato justicialista. Pero ello no les impedía, en cada elección, intentar utilizar el poder relativo que les daba su voto para obtener algunos be-

neficios, al menos a corto plazo⁷. En otras palabras, la hegemonía del PJ formoseño dentro de estas comunidades era paralela a la producción de formas locales de disenso y acomodamiento, a través de los cuales la gente trataba de manipular las divisiones internas del Justicialismo. Este rasgo del clientelismo es ciertamente común en otras regiones de Argentina (Auyero 2001; Íñigo Carrera 2001). Pero lo que quiero resaltar aquí es que, en el caso de Formosa, estas experiencias son constitutivas de subjetividades políticas, en un proceso en el que la etnicidad, la clase y el faccionalismo partidario convergen para producir un tipo históricamente específico de indigenidad.

4. A modo de conclusión: etnicidades, hegemonías y contra-hegemonías

Los ejemplos analizados en estas páginas confirman lo que ya numerosos antropólogos han señalado desde hace un tiempo: que la etnicidad como marcador identitario es un producto ineludible de relaciones de poder y dominación (Bourgois 1988; Comaroff y Comaroff 1992; de la Cadena y Starn 2007). Pero estos casos también muestran que, contradiciendo los estereotipos que aún circulan sobre ellos en los medios de comunicación y en algunos discursos académicos, los grupos indígenas constituyen (al igual que cualquier otro actor social) actores políticos contradictorios y heterogéneos, que están lejos de formar bloques homogéneos articulados a nivel político exclusivamente por su etnicidad. Como lo muestran los ejemplos anteriores, muchos dirigentes y votantes aborígenes participan activamente en la reproducción de la hegemonía del PJ en Formosa y despliegan identidades políticas definidas por las pujas entre diversas facciones del Justicialismo provincial, creando un entramado donde lo político-partidario y lo étnico aparecen estrechamente ligados.

Por un lado, la fuerza de estas redes faccionales-clientelares ha dejado pocos espacios que permitan el surgimiento de organizaciones indígenas como las que existen en otras provincias argentinas, que tengan una cierta autonomía frente al aparato partidario dominante. Pero esta hegemonía, antes que neutralizar el disenso, hace que las críticas al gobierno y las resistencias a sus políticas se canalicen por lo general en el interior de dicho partido. En otras palabras, retomando lo sostenido por Roseberry, un análisis etnográfico de la hegemonía del PJ formoseño en estas comunidades nos permite comprender, antes que la existencia de un supuesto «consenso», la particular dinámica étnico-política que adquieren los conflictos y disensiones articulados en ellas. De hecho, el peso de estas presiones dentro de las facciones justicialistas ha obligado a sucesivos gobiernos provinciales a adoptar discursos indigenistas que celebran a «nuestros hermanos aborígenes» y a implementar políticas que permitan retribuir, al menos parcialmente, las lealtades electorales creadas en la geografía provincial. En este sentido, es de notar que algunas de las políticas indigenistas en Formosa, sobre todo con respecto a la tierra y a la educación bilingüe, han tenido un

⁷ A pesar de ello, las relaciones clientelares no se limitan a momentos electorales. A menudo, estas relaciones tienen una relativamente larga continuidad y se traducen en prácticas cotidianas por las cuales los «punteros» del PJ proporcionan toda una gama de «favores» (como, por ejemplo, trasladar gente en sus vehículos de un lugar a otro o llevar gente enferma al hospital regional) que luego son activados para reclamar lealtades políticas durante una elección (ver Gordillo 2006, capítulo 8; Íñigo Carrera 2001).

tinte más «progresista» que en provincias vecinas como Salta (por ejemplo en el Chaco salteño, donde siguen sin resolverse viejas demandas territoriales). Pero lejos de ser el resultado de la generosidad oficial, estas políticas han sido en buena medida producto de las presiones y demandas que diversos actores indígenas imponen a través de relaciones clientelares-partidarias.

No obstante, y a modo de cierre, es importante resaltar que, siendo un campo permanente de disputa, la hegemonía del PJ en Formosa está moldeada por tensiones que en algunos momentos sacan a la luz, por un lado, las contradicciones en las prácticas oficiales así como sus componentes represivos, y por el otro, la creación por parte de actores aborígenes de mayores espacios de autonomía frente a dicho partido.

Un ejemplo de lo primero fue la violenta y masiva incursión que la policía provincial realizó en agosto de 2002 en el Barrio Namqom en las afueras de la ciudad de Formosa, con motivo de la muerte el día anterior de un policía en un campo privado a unos 20 kilómetros de la ciudad, supuestamente como resultado de un enfrentamiento con cazadores tobas del barrio. En esta incursión, alrededor de cien oficiales de policía realizaron un «rastrillaje» en todo el barrio que incluyó sacar de sus casas y golpear brutalmente a decenas de personas al grito de «¡un indio tiene que pagar!» La naturaleza indiscriminada de esta incursión, que apuntó a todo un colectivo debido a su indigeneidad, sacó a la luz el racismo y la violencia constitutivos del poder del Estado en la provincia, así como la complicidad del poder político con el poder judicial provincial (que legitimó la detención y posterior condena de varios hombres) y los medios de comunicación (que en su gran mayoría apoyaron la medida y resucitaron viejos imaginarios sobre el salvajismo indígena) (Vivaldi 2007). Otro ejemplo del doble discurso oficial fue el hecho de que la Constitución Provincial reformada en 2003 excluyó varios de los puntos reclamados por dirigentes aborígenes, como la inclusión del convenio 169 de la OIT (que fuera previamente adoptado por el gobierno nacional y reconoce importantes derechos político-culturales a los grupos indígenas). Ello en su momento generó abiertas críticas al gobierno de Insfrán entre dirigentes aborígenes por no cumplir con su supuesto compromiso con los derechos indígenas.

Como contrapartida de estos procesos, me interesa mencionar aquí dos ejemplos que muestran cómo algunos líderes y militantes aborígenes formoseños han logrado crear espacios de relativa autonomía frente al PJ. El primero lo constituye la Comisión de los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Pilcomayo, creada en 2001. El antecedente de esta entidad fue una comisión similar (la Comisión del Río Pilcomayo) organizada en el oeste de Formosa con motivo de la sequía del Pilcomayo en 1996, originada por la sedimentación de los canales construidos por los gobiernos de Argentina y Paraguay en el extremo noroeste de la provincia para garantizar el flujo de agua a ambos países. En aquel entonces, aquella comisión constituyó un importante espacio de presión para demandar la realización de obras que permitieran que las aguas bañaran la cuenca del Pilcomayo en Formosa (Gordillo y Leguizamón 2002). En 2001, aquella comisión se expandió significativamente a través de nuevos encuentros con dirigentes aborígenes de toda la cuenca del Pilcomayo, no sólo de Salta y Formosa sino también de Bolivia y Paraguay. Rebautizada «Comisión de los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Pilcomayo», esta entidad se transformó en un espacio articulador de solidaridades interétnicas, inter-provinciales e internacionales. Ello ha creado un ámbito de debate y

difusión de los problemas que padecen los pobladores aborígenes de la cuenca, como los canales, la contaminación de las aguas y las demandas territoriales no resueltas. Y este ámbito fue creado, con el apoyo de varias ONGs, principalmente por fuera del control directo del PJ formoseño.

El segundo y más reciente ejemplo lo constituye la apertura de una causa judicial promovida por la Federación de Comunidades del Pueblo Pilagá, con el patrocinio de abogados de ENDEPA, sobre la masacre de Rincón Bomba ocurrida en octubre de 1947 cerca de Las Lomitas. En aquel momento, tropas de Gendarmería Nacional mataron a varios centenares de hombres, mujeres y niños acusados de participar en un alzamiento (ver Vuoto y Wright 1991). Dicha causa –paralela a una similar realizada en la provincia del Chaco sobre la masacre de Napalpí de 1924– logró que a principios de 2007 un juez federal de Formosa fallara que los crímenes involucrados no son prescriptibles y que por ende son susceptibles de generar compensaciones por parte del Estado nacional. Más aún, anteriormente, y respondiendo a una demanda de la Federación, el juez había ordenado estudios forenses en uno de los varios sitios conocidos por ancianos pilagá por contener fosas colectivas producto de la masacre. Los peritos encontraron en esa fosa 27 restos humanos, lo que tuvo una cierta repercusión en los medios a nivel provincial y nacional. El hecho de que la causa judicial involucre al Estado nacional antes que al provincial, hace que esta demanda no haya sido vista como un cuestionamiento directo al gobierno formoseño. Pero iniciativas de este tipo no dejan de ser notables, pues implican una crítica abierta a la violencia estatal y a una institución como Gendarmería Nacional (que en Formosa es celebrada a nivel oficial como uno de los ejes de la identidad provincial) y crean el tipo de prácticas políticas que el gobierno provincial ha intentado limitar y contener de múltiples maneras. Estos dos ejemplos, en definitiva, muestran la existencia de instancias donde diversos actores indígenas logran abrir espacios novedosos en los intersticios de la hegemonía partidaria existente en Formosa.

Retomando lo señalado al comienzo de este trabajo, los programas de «Telenoche Investiga» capturaron parte de la realidad política experimentada por muchos aborígenes formoseños pero de una manera que pasa por alto –como suele ser el caso en coberturas mediáticas de este tipo– las complejidades étnico-políticas que existen dentro de sus comunidades. Como espero haber mostrado hasta aquí, una lectura dinámica y etnográfica del concepto de hegemonía permite dar cuenta de algunas de estas complejidades, que incluyen la participación de actores indígenas tanto en la recreación de esas relaciones de poder como en su crítica. Los diversos procesos aquí analizados muestran, además, que las prácticas contra-hegemónicas pueden adquirir muy diversas expresiones. Algunas de ellas, como las recién examinadas, son producidas por actores que tratan de limitar el control del partido dominante; pero muchas otras implican, antes que una ruptura frontal con las relaciones hegemónicas de las que son parte, un intento por reconfigurar los campos de fuerza que definen a toda hegemonía y contra-hegemonía.

AGRADECIMIENTOS. Presenté una versión preliminar de este trabajo en el VIII Congreso Argentino de Antropología Social, realizado en Villa Giardino, Córdoba, en mayo de 2004. Les agradezco a Mariana Gómez y Ana Vivaldi sus detallados comentarios críticos a un borrador

de este trabajo y a Lorena Cardin por insistirme en que aquella ponencia en Córdoba merecía ser publicada. Shaylih Muehlmann leyó y comentó la versión final de este trabajo e inspiró de múltiples maneras algunas de las ideas aquí presentadas.

5. Referencias bibliográficas

AUYERO, Javier

- 2001 *Poor People's Politics: Peronist Survival Networks and the Legacy of Evita*. Durham: Duke University Press.

BOURGOIS, Philippe

- 1988 *Ethnicity at Work: Divided Labor on a Central American Banana Plantation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

CARRASCO, Morita, y Claudia BRIONES

- 1996 *La tierra que nos quitaron: reclamos indígenas en Argentina*. Buenos Aires: IGWIA – Asociación Lhaka Honhat.

COMAROFF, Jean, y John COMAROFF

- 1991 *Of Revelation and Revolution Vol. 1: Christianity, Colonialism and Consciousness in Southern Africa*. Chicago: University of Chicago Press.

COMAROFF, John, y Jean COMAROFF

- 1992 *Ethnography and the Historical Imagination*. Boulder: Westview Press.
1997 *Of Revelation and Revolution Vol. 2: The Dialectics of Modernity on a South African Frontier*. Chicago: University of Chicago Press.

CONKLIN, Beth

- 1997 «Body Paints, Feathers, and VCRs: Aesthetics and Authenticity in Amazonian Activism». *American Ethnologist* 24 (4): 711-737.

DE LA CADENA, Marisol, y Orin STARN

- 2007 «Introduction», en *Indigenous Experience Today*, Marisol de la Cadena y Orin Starn, eds., pp. 1-30. Nueva York: Berg.

GORDILLO, Gastón

- 2002 «Locations of Hegemony: The Making of Places in the Toba's Struggle for La Comuna, 1989-1999». *American Anthropologist* 104 (1): 262-277.
2004 *Landscapes of Devils: Tensions of Place and Memory in the Argentinean Chaco*. Durham: Duke University Press.
2006 *En el Gran Chaco: antropologías e historias*. Buenos Aires: Prometeo.

GORDILLO, Gastón, y Juan Martín LEGUIZAMÓN

- 2002 *El río y la frontera: movilizaciones aborígenes, obras públicas y Mercosur en el Pilcomayo*. Buenos Aires: Biblos.

GRAMSCI, Antonio

- 1971 *Selection from the Prison Notebooks [1929-35]*. Editado por Quintin Hoare y Geoffrey Nowell Smith. Nueva York: International Publishers.

ÍÑIGO CARRERA, Valeria

- 2001 «Yo Soy Mercadería»: *Producción de relaciones clientelares en un asentamiento de población indígena en la ciudad de Formosa*. Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropológicas. Universidad de Buenos Aires.

- MOORE, Donald S.
2005 *Suffering for Territory: Race, Place, and Power in Zimbabwe*. Durham: Duke University Press.
- RAMOS, Alcida
1998 *Indigenism: Ethnic Politics in Brazil*. Madison: The University of Wisconsin Press.
- ROSEBERRY, William
1994 «Hegemony and the Language of Contention», en *Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico*, Joseph Gilbert y Daniel Nugent, eds., pp. 355-366. Durham: Duke University Press.
- SAWYER, Suzana
2004 *Crude Chronicles: Indigenous Politics, Multinational Oil, and Neoliberalism in Ecuador*. Durham: Duke University Press.
- TURNER, Terence
1991 «Representing, Resisting, Rethinking: Historical Transformations of Kayapo Culture and Anthropological Consciousness», en *Colonial Situations: Essays on the Contextualization of Ethnographic Knowledge*, George Stocking, ed., pp. 285-313. Madison: University of Wisconsin Press.
- VIVALDI, Ana
2007 «If I Have a Job in the City, I'll go to the Bush on Weekends»: *Place Production Among the Toba People in Northern Argentina*. Tesis de Maestría. University of British Columbia.
- VUOTO, Patricia, y Pablo WRIGHT
1991 «Crónicas del Dios Luciano: un culto sincrético de los Tobas y Pilagás del Chaco argentino». *Religiones Latinoamericanas* 2: 149-180.
- WARREN, Kay
1998 *Indigenous Movements and their Critics: Pan-Mayan Activism in Guatemala*. Princeton: Princeton University Press.
- WARREN, Kay, y Jean JACKSON
2002 «Introduction: Studying Indigenous Activism in Latin America», en *Indigenous Movements, Self-representation, and the State in Latin America*, Kay Warren y Jean Jackson, eds., pp. 1-46. Austin: University of Texas Press.
- WILLIAMS, Raymond
1977 *Marxism and Literature*. Oxford: Oxford University Press.

Nota de la REAA: Cuando este artículo se encontraba ya en proceso editorial, apareció publicada una versión del mismo en inglés, en el volumen 17 de *Journal of Latin American Cultural Studies* (2008). No obstante, el Consejo Editorial, de acuerdo con el autor y con los términos de los derechos de copia y de autor de Taylor & Francis, decidió mantenerlo en el presente número.